



REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTES: RUBÉN DARÍO GIRÓN GALEANO Y OTROS
DEMANDADA: VILAM S.A.S.
PROCEDENCIA: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ
RADICADO: 05360-31-05-002-2021-00362-01

Medellín, diecisiete (17) de junio dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación, interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto del 1° de diciembre de 2021, dictado por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, mediante el cual se admitió la demanda y se negó la medida cautelar solicitada por la parte actora, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por los señores **RUBÉN DARÍO GIRÓN GALEANO, JAIVER JIMÉNEZ CASTAÑEDA, JOHN MAURICIO ÁNGEL RODRÍGUEZ, LUIS ALBEIRO ROMÁN RESTREPO, JORGE ELIECER BOLÍVAR, JUAN DAVID ZAPATA CASTAÑO Y ANDRÉS FELIPE LÓPEZ JIMÉNEZ** en contra de la sociedad **VILAM S.A.S.**

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

La parte actora formuló demanda ordinaria laboral el 17 de noviembre de 2021 contra la sociedad VILAM S.A.S., pretendiendo se declare la existencia de la relación laboral, que se declare que fueron despedidos de manera unilateral y sin justa causa el día 20 de noviembre de 2018, que la demandada omitió pagarles prestaciones sociales por los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones; conceptos que a la fecha, continúan sin pagarse y que tienen derecho al reconocimiento de las indemnizaciones establecidas en los Artículos 64 y 65 C.S.T.

Por otra parte, los demandantes allegaron escrito en el cual solicitaron, de conformidad con el artículo 85-A del Código Procesal del Trabajo, modificado por el Art. 37A de la Ley 712 de 2001, el decreto de medidas cautelares en contra de la sociedad VILAM S.A.S. consistente en inscripción de la demanda en la Cámara de Comercio Aburrá Sur, el embargo y secuestro del establecimiento de comercio VILAM y oficiar a la Cámara de Comercio Aburrá Sur y a la Supersociedades para que impidan la disolución de la sociedad demandada hasta tanto se verifique que esta procedió a hacer la reserva para cubrir las obligaciones laborales, señalando como argumento de su solicitud que la sociedad demandada ha venido desarrollando actos tendientes a insolventarse y, en consecuencia, impedir la efectividad de sentencias con acreencias laborales, por lo que se corre el riesgo que las mismas no sean pagadas las con el proceso ordinario de la referencia, en caso que se termine el proceso liquidatorio y de disolución de VILAM S.A.S., sin que se produzca una sentencia ordinaria laboral en firme y un proceso ejecutivo.

Entre las acciones que consideran como actos tendientes a insolventarse enunciaron las siguientes:

1. Al finalizar el año 2018, despidió el total de los empleados, sin solicitar la debida autorización del Ministerio del Trabajo.
2. Suspendió todas las actividades comerciales desde finales de 2018.
3. Cerró el establecimiento de comercio llamado VILAM que tenía abierto al público.
4. La última renovación de la matrícula mercantil fue en marzo de 2018, prueba de ello, son los certificados expedidos por la entidad de registro de comercio.
5. En CÁMARA DE COMERCIO ABURRA SUR a la fecha del 23 de noviembre de 2020 se inscribió el decreto del embargo del establecimiento de comercio VILAM, en virtud de un proceso coactivo instaurado por el Municipio de Itagüí contra VILAM S.A.S., tal como lo demuestran los certificados expedidos por la entidad de registro de comercio.
6. En febrero de 2019, inicio proceso de LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA ante SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; y no obstante, esta solicitud fue rechazada por no cumplir requisitos a subsanar, en cualquier momento puede retomar la liquidación. Prueba de ello, es el Auto del 29 de octubre de 2019 emitido por la SUPERSOCIEDADES.

DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia, mediante auto interlocutorio del 1° de diciembre de 2021, admitió la demanda, y negó las medidas cautelares solicitadas, indicando como argumento de su decisión que si bien se verifica la legitimación para solicitar la medida cautelar por parte de los demandantes, toda vez que en el presente proceso se están solicitando acreencias de carácter laboral, que presuntamente la pasiva debe al actor, lo cierto es que respecto a la existencia o vulneración del derecho, en esta etapa procesal no es posible establecer la configuración de este, toda vez que la esencia del proceso ordinario laboral es evaluar las pruebas incorporadas al proceso por las partes y declarar si ha lugar el derecho presuntamente vulnerado, situación que a la fecha no ha ocurrido.

Por otra parte, indicó la *a quo*, que la parte actora funda su solicitud en el argumento de garantizar el cumplimiento de la obligación, sin que se allegue al Despacho prueba sumaria de que la sociedad VILAM S.A.S. se encuentre efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, por lo que no existen pruebas en el plenario que lleven al convencimiento de la necesidad de proteger las presuntas resultas del proceso.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada de los demandantes, inconforme con la providencia interpuso recurso de apelación indicando que, si bien, en la parte motiva del auto recurrido se trajo a colación la jurisprudencia establecida sobre el Art. 85A del Código de Procedimiento Laboral, se negaron las medidas solicitadas, por cuanto no se evidenciaba, al menos, prueba sumaria de la condición que pusiera en riesgo el pago de los derechos de los demandantes; lo cual es reprochable, pues con la solicitud se anexaron documentos que daban cuenta de hechos que de tiempo atrás viene mostrando públicamente la empresa demandada; además del hecho de despedir a todos sus trabajadores para la misma época y cerrar sus puertas al público.

CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Se circunscribe la decisión en esta instancia a establecer si debe concederse o no el decreto de medidas cautelares en contra de la sociedad VILAM S.A.S. consistente en inscripción de la demanda en la Cámara de Comercio Aburrá Sur, el embargo y secuestro del establecimiento de comercio VILAM y oficiar a la Cámara de Comercio Aburrá Sur y a la Supersociedades para que impidan la disolución de la sociedad demandada hasta tanto se verifique que esta procedió a hacer la reserva para cubrir las obligaciones laborales.

Establecido lo anterior, se tiene que la Juez de primera instancia, luego de considerar que las medidas cautelares innominadas consagradas en el artículo 590 del CGP, conforme lo señalado por la Corte Constitucional resultan aplicables en materia laboral, despachó de manera desfavorable la solicitud de decretar medidas cautelares en contra de la demandada VILAM S.A.S., tras considerar que no se allegó al plenario prueba sumaria de que la sociedad VILAM S.A.S. se encuentre efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, por lo que no existen pruebas que lleven al convencimiento de la necesidad de proteger las presuntas resultas del proceso.

El recurrente se duele de la anterior determinación, pues considera que, contrario a lo afirmado por la a quo, con la solicitud de imposición de medidas cautelares se anexaron documentos que daban cuenta de hechos que de tiempo atrás viene mostrando públicamente la empresa demandada; además, del hecho de despedir a todos sus trabajadores para la misma época y cerrar sus puertas al público.

Analizadas las posturas planteadas, se tiene que, como bien lo concluyó la Juez de primera instancia, frente a la posibilidad o no de aplicar al procedimiento laboral por remisión las medidas cautelares consagradas en el código general del proceso, la Corte Constitucional se pronunció a través de la sentencia C-043 de 2021, condicionando la medida cautelar en el proceso ordinario, contemplada en el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, la cual reformó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 85A, señalando que la disposición acusada admitía dos interpretaciones posibles, (i) Una primera conforme a la cual era una norma especial que impedía la aplicación, por remisión normativa, del régimen de medidas cautelares dispuesto en el CGP, posición esta adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que llevaba a concluir que la disposición vulneraba el principio de igualdad, pero también (ii) otra interpretación que reconociera que la norma no impedía esta posibilidad de aplicación, por remisión normativa, concretamente del literal c) del numeral 1° del artículo 590 del CGP, referente a la facultad del juez de decretar medidas cautelares innominadas.

Señaló la alta Corporación que, de estas dos interpretaciones posibles, debía preferirse la segunda, porque hacía efectivos los principios constitucionales de protección especial al derecho del trabajo, ínsitos en las reclamaciones de orden laboral, y no generaba un déficit de protección del derecho a la tutela judicial efectiva y en ese orden de ideas resolvió declarar exequible de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido según el cual en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas, previstas en el literal “c” del numeral 1° del artículo 590 del CGP el cual establece, que se puede aplicar cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión, señalando que para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

Para arribar a la anterior conclusión, la Sala Plena de la Corte estimó lo siguiente:

“En tal sentido, la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1°, literal “c” del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas, por las siguientes razones.

El CGP es un cuerpo legal que complementa los demás procedimientos judiciales en lo no contemplado en ellos. Así lo dispone su artículo 1° cuando sostiene que “se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén expresamente regulados en otras leyes”. A su turno, como se ha indicado en párrafos anteriores, el CPT permite aplicar analógicamente disposiciones especiales no contempladas en este. Tal es el caso de las medidas cautelares innominadas, no previstas en el CPT, pero sí en el CGP.

La posibilidad de aplicar analógicamente las medidas cautelares innominadas del proceso civil en el laboral se debe a que con ellas el legislador responde “a la variedad de circunstancias que se pueden presentar”^[113] en el proceso, por lo que resultan idóneas y eficaces para prevenir daños y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores en sus distintas dimensiones.

En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1°, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio,

impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

Por el contrario, las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil. Si se admitieran en el proceso laboral todas las medidas cautelares de la referida norma procesal general, implicaría que en él pudiera solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, pasando por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual.

Así, la referida interpretación judicial del artículo acusado aumenta significativamente la garantía del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva de los justiciables del proceso laboral, pues para decretar la medida cautelar innominada el juez seguirá los parámetros establecidos por el art. 590 del CGP. Con esto se superan la desventajas que los demandantes señalaban respecto del art. 37A de la Ley 712 de 2001, referidas (i) al listado de medidas disponibles, (ii) su efectividad, (iii) el estándar para decretarlas y (iv) el plazo para resolverlas. Sumado a ello, este entendimiento de la norma es conforme con los principios de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, el de contar con un recurso judicial efectivo y con el trato especial que la Constitución Política otorga a los derechos al trabajo y a la seguridad social, tanto en su dimensión sustancial como procedimental.

Finalmente, es importante recordar que, según lo visto en el acápite de consideraciones, las medidas cautelares innominadas ya estaban presentes en otros procedimientos judiciales especiales antes de ser introducidas por el legislador en el CGP (Ley 1564 de 2012). Esto último significó sin duda que, a partir de ese momento, tal herramienta jurídica dejaba de ser una prerrogativa exclusiva de algunos procesos particulares para empezar a regir en la generalidad de los procesos declarativos, a excepción del proceso laboral. Por tanto, con la presente decisión se supera ese trato desigual del que era objeto el proceso laboral en relación con las medidas innominadas.”

Conforme lo anterior, encuentra la Sala que, bajo la nueva interpretación jurisprudencial otorgada al Artículo 37A de la Ley 712 de 2001, le está permitido al Juez laboral dentro del trámite ordinario, a la luz de lo dispuesto en el citado artículo 590 del CGP, decretar *cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.*

Dilucidado lo anterior, debe traerse a colación lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 85A del CPT y de la SS, el cual al tenor dispone:

“Cuando el demandado, en *proceso ordinario*, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, **o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente *proceso* entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.” (resaltado de la Sala)

Acorde con lo dispuesto en la norma citada, analizado el escrito mediante el cual se solicita la imposición de medidas cautelares, así como las pruebas documentales que

se acompañaron con dicha solicitud, encuentra la Sala que, si bien es cierto que como lo manifestó la Juez *a quo*, no es posible afirmar en este caso que la sociedad demandada VILAM S.A.S., se encuentre efectuando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, si puede considerarse que a la fecha y desde el año 2018, dicha sociedad **se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones**, lo cual se logra evidenciar de los hechos de haber tenido que prescindir de los 5 trabajadores de los demandantes al finalizar el año 2018, no haber renovado la matrícula mercantil para el año 2019, haber incumplido con sus obligaciones con el Municipio de Itagüí, lo que a su vez le generó que dicho ente territorial procediera a decretar el embargo del establecimiento de comercio denominado VILAM dentro del proceso de cobro coactivo instaurado por la Alcaldía Municipal, y finalmente haber solicitado ante la Superintendencia de Sociedades a través de memorial del 1 de agosto de 2019 la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad, trámite que fue inicialmente inadmitido por dicha Superintendencia mediante providencia del 07 de octubre de 2019, y finalmente rechazada por no haber subsanado los requisitos exigidos.

Todos estos elementos o hechos, que se encuentran acreditados con prueba documental, permiten claramente a la Sala construir un indicio en torno a la difícil situación económica que viene afrontando la sociedad demandada desde finales del año 2018, de lo que se desprende que tal situación se acopla al supuesto de hecho contenido en el inciso 1 del artículo 85A del CPT y de la SS, por lo que en principio sería, decretar medidas cautelares innominadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del CGP.

Las medidas solicitadas consistentes en oficiar a la Cámara de Comercio Aburrá Sur y a la Supersociedades para que impidan la disolución de la sociedad demandada hasta tanto se verifique que esta procedió a hacer la reserva para cubrir las obligaciones laborales, son improcedentes, pues por mandato legal, si una empresa se encuentra en las causales que exige la Ley para su disolución y liquidación, ello no se puede impedir de ninguna manera, pues esta medida es precisamente la última opción para que se pueda pagar a los acreedores lo que se alcance cancelar con los bienes existentes, proceso en el que los trabajadores tienen prelación en el pago de sobre sus créditos.

Ahora respecto de la medida de secuestro del establecimiento de comercio VILAM, la parte demandante asevera que tal el establecimiento de comercio fue cerrado en el año 2018, por lo que no habría cómo secuestrarlo.

Ahora, respecto del EMBARGO del establecimiento de comercio denominado VILAM, ubicado en la Calle 51 N° 41-35 del Municipio de Itagüí, el cual se encuentra matriculado en la Cámara de Comercio Aburra Sur, con el número de Matrícula N° 146201, se observa que, respecto de tal establecimiento de comercio, ya existe una medida cautelar de embargo, decretada en un proceso ejecutivo coactivo, por lo que a juicio de la Sala, no es procedente decretar otra medida de embargo en un proceso ordinario de conocimiento como el que nos ocupa, pues la concurrencia de embargos, a la luz de Art. 465 del CGP solo es posible en procesos ejecutivos de distinta naturaleza, pero no con el de procesos ordinarios de conocimiento en el que no existe aún un crédito a cobrar, pues el derecho pretendido está en litigio, es decir que no es un derecho claro, expreso, indiscutible y exigible, no pudiéndose entonces por la vía de una medida de embargo en un proceso ordinario, interferir en un proceso ejecutivo donde ya se cobra una obligación con título de recaudo ejecutivo.

No obstante, a juicio de la Sala, si es procedente la figura jurídica prevista en el Artículo 466 del CGP, consistente en la persecución de bienes embargados en otro proceso, pues con esta medida no se interfiere en el proceso ejecutivo, sino que se busca que los remanentes que queden en el proceso donde a esta embargado un bien o sirvan para pagar el eventual derecho que pueda asistirle al accionante en el proceso ordinario, o que si se llegaren a desembargar los bienes en el proceso ejecutivo queden a órdenes del proceso ordinario, por lo que se revocará el auto apelado para en su lugar decretará, el embargo de los bienes, que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados, en el proceso, lo que se comunicará mediante oficio al funcionario que este adelantado el proceso ejecutivo coactivo del Municipio de Itagüí, indicándole, que debe dejar testimonio del día y la hora en que reciba el oficio, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, caso en el cual el citado funcionario hará saber al juez de este proceso ordinaria laboral, la existencia de otro embargo de remanentes o de los que se llegaren a desembargar, quedando en todo caso, vigente la medida de embargo de los bienes que se llegaren a desembargar y de remanentes, si finalmente llegaren a quedar después del pago de todos los crédito de los procesos ejecutivos.

Indíquese en el oficio de comunicación del embargo al funcionario del proceso ejecutivo, que deberá proceder conforme los mandatos del Artículo 466 del CGP

Conforme a los argumentos fácticos, probatorios y de derecho expuestos en precedencia, esta Sala revocará el Auto interlocutorio proferido el 1° de diciembre de

2021 por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, en cuanto negó la medida cautelar solicitada por la parte actora, y en su lugar se dispondrá como medida cautelar innominada, la que se indica en los incisos anteriores.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el Auto interlocutorio proferido el 1° de diciembre de 2021 por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE ITAGÜÍ, que negó las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, para en su lugar, **DECRETAR** la medida de embargo de los remanentes, o de los bienes que se llegaren a desembargar en el proceso ejecutivo coactivo, que adelanta el municipio de Itagüí, contra la sociedad VILAM S.A.S.

SEGUNDO: ORDENAR al *a quo*, que oficie al funcionario que este adelantado el proceso ejecutivo coactivo indicado en el ordinal anterior, indicándole, que debe dejar testimonio del día y la hora en que reciba el oficio, momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, caso en el cual el citado funcionario hará saber al juez de este proceso ordinaria laboral, la existencia de otro embargo de remanentes o de los que se llegaren a desembargar, quedando en todo caso, vigente la medida de embargo de los bienes que se llegaren a desembargar, y de remanentes, si finalmente llegaren a quedar después del pago de todos los crédito de los procesos ejecutivos.

Indíquese en el oficio de comunicación del embargo al funcionario del proceso ejecutivo coactivo, que deberá proceder conforme los mandatos del Artículo 466 del CGP.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión.

Los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **107** del **21 DE JUNIO DE 2022**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **46a3ee7dd1bb253f67b1b4b31d52f4f0a8bf11f7a65148510593a881d284312a**

Documento generado en 17/06/2022 01:25:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>